

Reparar las profundas fracturas para generar gobernabilidad

Es evidente que el momento actual protagoniza una nueva configuración de lo social. Ante la realidad de un entorno creciente de complejidad e incertidumbre, observamos una fractura entre lo que la sociedad y los ciudadanos demandan y lo que el gobierno y los gobernantes ofrecen y gestionan. Este desfase le resta confianza y credibilidad al quehacer de lo público. Y la pregunta es si el interés de mantener la opacidad, el secreto y la falta de transparencia en el proceso tradicional de gobernar puede sostenerse ante un entramado de necesidades y demandas sociales cada vez más diversas, dinámicas y crecientes.

El cambio que estamos viviendo es tan significativo que enfrentarlo ya no es un simple problema incremental, sino un cambio de paradigma. A estos desafíos se le suma la falta de entendimiento sobre las causas y el impacto de dichos cambios. El desgaste del tejido social y los problemas económicos y sociales que encaramos relacionados con: la aceleración de los cambios demográficos, el deterioro de la educación, las

deficiencias en la gestión energética, la falta de acceso a vivienda, la corrupción generalizada y el aumento en la tasa de crímenes y violencia exige unir voluntades y talentos y atrevernos a transformar estructuras y paradigmas en favor del bienestar de la sociedad.



**Dra. Eneida
Torres
de Durand**

Directora
Ejecutiva Centro
de Gobernanza
Pública y
Corporativa

El deterioro en la gestión de los asuntos públicos ha impactado negativamente prácticamente todos los servicios públicos y la calidad de vida de la población, como hemos visto en tiempos recientes en el aumento de los casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y de otra índole. Más aún, los ciudadanos perciben que persiste una forma de gestionar lo público y hacer política caracterizada por la intromisión indebida entre los poderes públicos —ejecutivo, legislativo y judicial— y la gestión de intereses de manera opaca entre ellos mismos.

Los cuestionamientos sobre la fractura en la separación de poderes que arrastramos hace décadas ha debilitado seriamente su independencia y la rendición de cuentas horizontal que deberían ejercer entre ellos. Es decir, el control que debería ejercerse entre unos

y otros ha sido reemplazado por un sistema transaccional en el cual las diferencias entre el ejecutivo y el legislativo se resuelven con la asignación opaca de recursos y cargos públicos; los mecanismos de control para la designación de funcionarios en altos cargos ejecutivos y los nombramientos de empleados en oportunidades para tramitar favores e intereses entre sí. A esto se suma la designación en muchas instancias politizada de los ejecutivos y directivos, tanto a nivel estatal y municipal como legislativo y judicial, así como los persistentes riesgos de corrupción que enfrentan estas instituciones.

En esta instancia, la buena gobernanza emerge como una condición indispensable para atender la realidad social y para evitar los procesos de fragmentación que se manifiestan como consecuencia de las dinámicas individualistas y de confrontación de intereses que generalmente caracterizan a toda sociedad. En consecuencia, las decisiones y las acciones de gobierno deberán ser el resultado de procesos inclusivos y participativos donde la colaboración desempeñe un papel protagónico en pro del bienestar colectivo y no de intereses particulares, propiciado por el inversionismo político-partidista.

La complejidad y los cambios que encaramos, contrario a lo que se creía en

antaño, son fuentes de innovación para atender los desequilibrios y renovar los procesos. Esta perspectiva apunta a la revisión y renovación de la visión tradicional de gestionar el gobierno y plantea nuevas interrogantes y asuntos a tener en cuenta. Ya no es un asunto de fortalecer, sino de reconfigurar el rol del gobierno y los partidos políticos para elevar su capacidad de gestionar lo público en un entorno creciente de complejidad e incertidumbre. La complejidad de los cambios debe permitirnos pensar, entender y cambiar el modelo de gestión pública desde otro paradigma.

Para avanzar en la articulación de un ecosistema de buena gobernanza pública que genere resultados en beneficio del bien común de la sociedad, se necesita compromiso, voluntad y nuevas capacidades en todos los niveles de la gestión gubernamental y hacer que las instituciones sean más eficaces, inclusivas y responsables. Mejorar la gobernabilidad implica que la ciudadanía considere que el marco institucional provee seguridad, bienestar, mejores condiciones económicas y resultados contundentes contra la impunidad. Abordar estos desafíos complejos requiere una nueva articulación de la sociedad y de nuevos enfoques de gestión y alianzas entre el gobierno y todos los actores de la sociedad.